

LEGAJO DE APELACIÓN FORMADO EN LA CAUSA N° CPE 1675/2016, CARATULADA "SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A. Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 24.769" J.N.P.E. N° 2, SECRETARÍA N° 4. EXPEDIENTE N° CPE 1675/2016/4/CA2. ORDEN N° 31.621. SALA "B".

Buenos Aires, de mayo de 2025.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la señora fiscal de la instancia anterior contra la resolución por la cual el juzgado “*a quo*” dictó, en lo que interesa a la presente, el auto de sobreseimiento de SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A. en los autos principales.

Los memoriales por los cuales el señor fiscal general de cámara y la defensa de SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A. informaron en los términos previstos por el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, por la resolución recurrida, el juzgado “*a quo*” dictó el auto de sobreseimiento de J. C. H. y de SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A. en orden a los hechos consistentes en la omisión presunta de depósito, dentro del término legal establecido, de las sumas de dinero que habrían sido retenidas a los empleados en relación de dependencia de SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A. en concepto de aportes correspondientes al Sistema Único de Seguridad Social por los períodos mensuales 11/2010, 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013 y 08/2013 por las siguientes sumas: \$ 60.393,31; \$ 69.283,15; \$ 61.456,93; \$ 62.516,93; \$ 62.048,26; \$ 67.881,53; \$ 77.299,47; \$ 77.292,33; \$ 76.772,18; \$ 77.940,79; \$ 97.454,41; \$ 84.103,43; \$ 78.336,42; \$ 77.474,75; \$ 77.834,84; \$ 76.408,92; \$ 89.292,90; \$ 87.213,31; \$ 85.945,41; \$ 88.199,16; \$ 85.177,15; \$ 40.375,07; \$ 45.499,55; \$ 26.780,36; \$ 25.254,99; \$ 25.858,12; \$ 21.316,02; \$ 21.100,40; \$ 30.645,78 y \$ 23.180,12, respectivamente, por entender que “*...con relación a tales sucesos media una causa de inculpabilidad (arts. 334 y 336 inc. 5º del C.P.P.N.)...*”.

Para decidir de la manera en que lo hizo con relación a la situación del nombrado H. , el magistrado “*a quo*” consideró que resultaría aplicable al caso lo previsto en el art. 336 inc. 5º del C.P.P.N., toda vez que se verificaría respecto del nombrado “*...un supuesto de incapacidad mental sobreviniente de carácter irreversible, es decir que, si bien la persona podría haber comprendido la criminalidad de los actos al momento de su comisión,*



actualmente y en el futuro no podría comprender las imputaciones que se le pudieran formular ni el sentido de la pena que se le pudiera aplicar... ”.

Respecto de la situación de SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A., el señor juez “*a quo*” comenzó recordando que con fecha 20/02/2018 se citó a la persona de existencia ideal mencionada a prestar declaración indagatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.N. y que, en función de lo informado por la A.F.I.P. (actual A.R.C.A.), se dispuso que aquella declaración sea prestada por J. C. H. , en carácter de representante de la misma. Asimismo, reseñó la información aportada al expediente por el organismo recaudador y por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos respecto de la sociedad a la que viene haciéndose mención, de la cual surgiría que la misma se encuentra inactiva. Al respecto, destacó que: “*...el último resumen de DDJJ IVA resulta ser por el período fiscal 2013-08...*”, que “*...el último domicilio actualizado data del 28/06/2013...*”, y que “*...la sociedad mencionada al día de la fecha se encuentra en estado inactivo, no tiene bienes registrables ni actividad económica vigente en la actualidad...*”. En ese contexto, por la resolución recurrida se consideró que, en principio, correspondería disponer el archivo de las actuaciones por imposibilidad de proceder respecto de SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A., de conformidad con lo establecido por el artículo 213, inciso d), del C.P.P.N.

No obstante, consideró que en atención al régimen previsto por el artículo 14 de la Ley 24.769, resultaba pertinente analizar la responsabilidad de la persona jurídica bajo el modelo de responsabilidad penal vicarial, al tratarse de hechos que habrían sido cometidos “*...en nombre, con la ayuda o en beneficio...*” de la entidad. Al respecto, el magistrado a cargo del juzgado de la instancia anterior sostuvo que “*...la pena...no se le pone a la persona jurídica por la acción u omisión propia de aquélla sino por el ilícito tributario cometido por un tercero...*”. En este sentido, por la resolución en examen se entendió que correspondía hacer extensiva a SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A. la solución adoptada respecto de su representante, J. C. H. , en tanto consideró que “*...el sobreseimiento en los términos del artículo 336 inc. 5° del C.P.P.N., al poner fin al proceso, resulta más beneficioso para la mencionada entidad que un archivo en los términos del artículo 213, inc. d)...*”.

2º) Que, la señora fiscal de la instancia previa se agravió de la resolución reseñada precedentemente únicamente en lo referido al auto de sobreseimiento dictado respecto de SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A. Consideró que “*...las circunstancias que derivan en supuestos de incapacidad sobreviniente conciernen a circunstancias de naturaleza personal, no comunicables a los demás sujetos que hayan tomado parte en la comisión de los hechos...*” y que “*...en materia de representación debe entenderse que la*



persona del representante resulta esencialmente fungible, y por ende plenamente reemplazable frente a la existencia de alguna clase de impedimento...”.

Asimismo, afirmó que “...no se ha verificado en el caso ningún supuesto que determine el retiro de la personería para obrar, se hayan cumplido con los pasos necesarios para entender disuelta la sociedad o haya acontecido alguna de las circunstancias que determinan la extinción de la persona de existencia ideal, no se advierte la existencia de ningún supuesto que determine una imposibilidad para que aquel ente pueda proveer lo necesario para ejercer su representación, de modo tal de poder continuar con la sustanciación del proceso a su respecto...”.

Según su razonamiento, el temperamento remisorio adoptado por el juez, que se había fundado en “...un análisis somero de la situación económica que el ente presentó en un periodo temporal posterior a la comisión de los hechos...”, se habría basado en un estado de “...inactividad...” que no constituía causal de incapacidad sobreviniente; en ese sentido, afirmó que dicha situación “...ni cristaliza una situación de incapacidad sobreviniente por la cual la persona de existencia ideal se encuentre impedida de continuar llevando a cabo los actos atinentes a su representación... como tampoco surte ninguno de los supuestos que previstos en los distintos incisos del art. 336 del C.P.P.N....”.

La parte recurrente agregó que “...no se comprende de qué manera las circunstancias valoradas por el Juez... puedan reportar alguna virtualidad en torno a controvertir las circunstancias de hecho que fueran correctamente valoradas en torno a la tipicidad de los comportamientos investigados...”, ni de qué modo tales circunstancias podían obstaculizar la prosecución del proceso penal respecto de la persona de existencia ideal.

Argumentó que “...en ninguno de los distintos regímenes relativos a reglar procesos seguidos respecto de personas de existencia ideal que fueron incorporándose a nuestra legislación...se contemplan supuestos de suspensión, incapacidad o conclusión del proceso, sobre la base de las circunstancias en función de las cuales V.S. pretende sustentar la decisión de sobreseer a la sociedad comercial...”. Indicó también que “...la capacidad para actuar de una persona jurídica solo se pierde cuando se verifica alguno de los supuestos referidos con anterioridad...” y citó precedentes en los que se habría admitido la prosecución de causas penales aun respecto de sociedades en proceso de quiebra.

Por último, expresó que la decisión recurrida “...constituye una creación pretoriana de un supuesto de conclusión del proceso penal, que no encuentra sustento en ninguna norma concreta...” y que “...aquella decisión violenta la prohibición que establece el art. 5to. del C.P.P.N....”.



3º) Que, por el art. 5 del C.P.P.N. se establece que: *“La acción penal pública se ejercerá por el Ministerio fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley”* (el resaltado corresponde a la presente).

A su vez, por el art. 77 del cuerpo legal citado precedentemente se regula lo siguiente: *“Si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el tribunal suspenderá la tramitación de la causa y, si su estado lo tornare peligroso para sí o para los terceros, ordenará la internación de aquél en un establecimiento adecuado, cuyo director le informará trimestralmente sobre el estado del enfermo. La suspensión del trámite del proceso impedirá la declaración indagatoria o el juicio, según el momento que se ordene, sin perjuicio de que se averigüe el hecho o se prosiga aquél contra los demás imputados”* (el destacado es de la presente).

Por otro lado, por el art. 336 inc. 5) del código de formas referido por la resolución recurrida, se establece: *“El sobreseimiento procederá cuando...5) Media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria...”*. Además, cabe recordar que, conforme se ha establecido por pronunciamientos numerosos de este Tribunal, el sobreseimiento es la resolución jurisdiccional por el cual se concluye el proceso definitiva e irrevocablemente con relación al imputado en cuyo favor se dicta, y encuentra fundamento en las causales taxativamente previstas por la ley. Por consiguiente, para el dictado de un pronunciamiento con aquellos alcances es necesaria la certeza del juzgador sobre la configuración de alguna de las causales previstas por el art. 336 del C.P.P.N. (confr. C.F.C.P., Sala I, *“NAVARRO, JUAN MANUEL Y OTROS S/ RECURSO DE CASACIÓN”*, rta. el 23/05/01; Sala III, *“SAKSIDA, WALTER RAÚL S/ RECURSO DE CASACIÓN”*, rta. el 18/2/00; Sala IV, *“SANTOS, ENRIQUE JOSÉ S/ RECURSO DE CASACIÓN”*, rta. el 22/11/99; y Regs. Nos. 634/03, 394/00, 719/06, 655/09, CPE 970/2016/4/CA2, res. del 10/07/2019, Reg. Interno N° 470/19 y CPE 958/2022/CA1, res. del 24/04/2023, Reg. Interno N° 153/23, entre otros, de esta Sala “B”; y CPE 1635/2019/CA1, res. del 08/02/2023, Reg. Interno N° 17/23 y CPE 1060/2021/1/CA3, res. del 13/03/2023, Reg. Interno N° 61/23, de la Sala “A” de esta Cámara, entre otros).

4º) Que, con relación a lo expresado por la resolución recurrida, relativo a que en el caso correspondería el archivo de las actuaciones en los términos del art. 213, inc. d) del C.P.P.N., en virtud de haberse verificado que la sociedad mencionada se encontraría actualmente *“inactiva”* cabe expresar que se advierte que la norma citada por el juzgado *“a quo”* a los fines de



fundar el mismo se refiere al archivo de las actuaciones que puede requerir el representante del Ministerio Público Fiscal en las causas en las cuales la dirección de la investigación le ha sido delegada y, en este caso, la señora fiscal de la instancia previa interviniente no solicitó aquella resolución respecto de SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A., sino que por el contrario, apeló la decisión remisorio.

Por otra parte, aun de verificarse que la sociedad se encuentre “*inactiva*” en la actualidad, esa situación se referiría a un período temporal posterior al de comisión presunta de los hechos investigados, y no permitiría justificar el dictado de un auto de archivo con relación a la sociedad mencionada por los motivos expresados en las consideraciones de aquel, puesto que, contrariamente a lo indicado por el juzgado “*a quo*”, aquéllos, en el caso, no constituyen un impedimento para proceder con la imputación formulada a SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.

Cabe recordar que, en el caso, a SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A. se le imputaron los hechos que fueron reseñados por el considerando 1º) de la presente, relacionados con la presunta apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social retenidos a los empleados en relación de dependencia de la nombrada por períodos mensuales vinculados con los períodos fiscales mensuales 11/2010, 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013 y 08/2013, mientras que la conclusión a la que se arribó por la resolución recurrida respecto de la supuesta inactividad de la firma se basó en que la última actividad verificada de aquélla data del año 2013.

Por otra parte, la solución remisorio dispuesta por el juzgado “*a quo*” con relación a SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A., relativa a que la inactividad que se verificaría respecto de aquélla impediría proseguir con el avance del proceso a su respecto, tampoco encuentra sustento normativo en disposición sustantiva alguna, así como tampoco en la ley 24.769, ni en el Régimen Penal Tributario aprobado por la ley 27.430.

5º) Que, establecido lo anterior, con relación al auto de sobreseimiento dictado respecto de SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A., tratándose J. C. H. y SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A. de personas diferentes -al margen de la existencia ideal o real de las mismas- y, por ende, de imputados diferentes, la extensión analógica a la persona jurídica aludida del auto de sobreseimiento dictado por el juzgado “*a quo*” respecto del nombrado H. en función de la incapacidad actual del mismo para estar en juicio (art. 77 del C.P.P.N.), no se ajusta a derecho.



En este sentido, cabe señalar además que la supuesta inactividad de SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A. aludida por la resolución recurrida, no se encuentra suficientemente corroborada en la causa, toda vez no surge del expediente que se haya profundizado la investigación tendiente a determinar si aquélla fue liquidada o disuelta, o, en su caso, quién es su representante legal luego de sobrevenir la incapacidad mental de J. C. H. .

6º) Que, frente a una circunstancia que imposibilite a un representante legal de una sociedad anónima a actuar en su nombre en la instancia judicial en la que aquélla se encuentre imputada, los órganos de administración de aquella persona jurídica deberán por sí o, en su caso, a requerimiento judicial, designar a otra persona para representarla.

En consecuencia, la omisión de proceder en el sentido referido por parte de quienes se hallan facultados para hacerlo, no puede justificar, en el marco de un proceso como el presente, el dictado de un auto de sobreseimiento respecto de un imputado en situaciones por las que no se encuentra prevista legalmente una medida como la impugnada.

7º) Por lo tanto, la resolución apelada no se ajusta a derecho y corresponde que sea revocada.

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. REVOCAR la resolución apelada en cuanto fue materia de recurso.

II. SIN COSTAS (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase.

Firman sólo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía restante de esta Sala.

